



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

64ª REUNIÓN — 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA — 14 DE FEBRERO DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF,

del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM

y del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor JORGE R. YOMA

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
BAUM, Daniel
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENECHINI, Javier Reynaldo
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio

MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.
OYARZÚN, Juan C.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
QUINZIO, Bernardo F.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
USANDIZACA, Horacio D.
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

ANGELOZ, Eduardo C.
AVELÍN, Alfredo
CABANA, Fernando V.
DE LA RÚA, Fernando
LUDUEÑA, Felipe E.
PARDO, Angel F.
PRETO, Ruggero
VACA, Eduardo P.

EN COMISION:

GIOJA, José L.

SUMARIO

1. Por invitación del señor vicepresidente de la Nación, el señor senador por Tucumán, don Carlos Almirón, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 6661.)

2. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 6661.)
- II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Carlos A. Floria como embajador extraordinario y plenipotenciario (P.E.-9037/95). (Pág. 6661.)
- III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal (P.E.-9089/95). (Pág. 6661.)
- IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece un marco normativo y regulatorio para la explotación administrativa y funcionamiento de aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (P.E.-9099/95). (Pág. 6664.)
- V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científico-Técnico con el Gobierno de Turquía, suscrito en Buenos Aires (P.E.-973/95). (Pág. 6675.)
- VI. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 6676.)
- VII. Proyecto de ley en revisión sobre reforma impositiva (C. D. -153/95). (Pág. 6677.)
- VIII. Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión por el que se establecen normas para la asignación, distribución y ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional (S.-1580/94). (Pág. 6678.)
- IX. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 6680.)
- X. Comunicaciones oficiales. (Pág. 6680.)
- XI. Dictamen de comisión. (Pág. 6681.)
- XII. Peticiones particulares. (Pág. 6681.)
- XIII. Proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se conmemora la jornada electoral del 24 de febrero de 1946 (S.-1880/95). (Pág. 6681.)

XIV. Proyecto de comunicación del señor senador Galván por el que se solicitan informes sobre el desvío de armas argen-

tinas destinadas a Panamá hacia Croacia (S.-1881/95). (Pág. 6682.)

XV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el suministro de tecnología nuclear a Irán (S.-1882/95). (Pág. 6684.)

XVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre una operación de venta de armas a Colombia (S.-1883/95). (Pág. 6685.)

XVII. Proyecto de resolución del señor senador Berhongaray por el que se solicitan informes acerca de la posición argentina ante la veda a la importación de productos carneos por parte de la Unión Europea. (S.-1884/95). (Pág. 6686.)

XVIII. Proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicitan informes sobre prevención de incendios forestales (S.-1885/95). (Pág. 6687.)

XIX. Proyecto de resolución del señor senador Martínez Almudevar por el que se auspicia el I Simposio Internacional La Salud en el Mercosur, organizado por Crexal (S.-1886/95). (Pág. 6688.)

XX. Proyecto de resolución del señor senador Martínez Almudevar por el que se declara de interés científico para el Honorable Senado el IV Seminario Argentino de Cirugía Veterinaria y IV Taller de Enseñanza de la Cirugía, en La Pampa (S.-1887/95). (Pág. 6688.)

XXI. Proyecto de comunicación del señor senador Agúndez por el que se solicitan informes sobre el monto actual y evolución de la deuda del Banco de la Provincia de San Luis (S.-1888/95). (Pág. 6689.)

XXII. Proyecto de resolución del señor senador Solana por el que se solicita la remisión de estudios de impacto ambiental y daños resultantes de los incendios forestales en el sur argentino al Honorable Senado (S.-1889/95). (Pág. 6689.)

XXIII. Proyecto de comunicación del señor senador Sáez por el que se solicita una compensación económica para productores laneros de las provincias patagónicas (S.-1890/95). (Pág. 6690.)

XXIV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Sala y Mac Karthy por el que se declara de interés nacional las VII Olimpiadas Nacionales para la Tercera Edad a realizarse en Chubut (S.-1891/95). (Pág. 6691.)

XXV. Proyecto de declaración del señor senador Galván y otros señores senadores

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

ponde tomarle juramento como senador titular electo por la provincia de Santiago del Estero. A tal efecto se lo invita a pasar al recinto.

—Ingresa en el recinto el señor senador nacional electo por la provincia de Santiago del Estero don Javier Reynaldo Meneghini.

Sr. Presidente. — Invito a los presentes a ponerse de pie.

—Así se hace.

Sr. Presidente. — Señor senador nacional electo por la provincia de Santiago del Estero don Javier Reynaldo Meneghini: ¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Sr. Senador Electo Meneghini. — ¡Sí, juro!

Sr. Presidente. — Si así no lo hicierais, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos. Varios señores senadores rodean y felicitan al señor senador Meneghini.)

Sr. Presidente. — Queda incorporado el senador que acaba de prestar juramento, cuyo mandato concluye el 9 de diciembre del año 2001.

5

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo y en el proyecto de ley del señor senador Solari Yrigoyen, por el que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.064.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Pinzzi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el mensaje 570/95, y el proyecto de ley del señor senador Solari Yrigoyen, expediente S.-726/94, por los que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" suscrita

en Belém do Pará —República Federativa del Brasil— el 9 de junio de 1994; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1° — Apruébase la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", suscrita en Belém do Pará —República Federativa del Brasil— el 9 de junio de 1994, que consta de veinticinco (25) artículos, cuyos textos forman parte de la presente ley.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de febrero de 1996.

Eduardo Menem. — Olijela del Valle Rivas. — Carlos Manfredotti. — Remo J. Costanzo. — Antonio Cafiero. — Omar Vaquir. — Cristina Fernández de Kirchner. — Eduardo C. Angeloz. — Antonio T. Berhongaray. — Luis A. León. — Juan R. Aguirre Lanari.

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

Los Estados Partes de la presente Convención,

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmando en otros instrumentos internacionales y regionales;

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;

Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimo-quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;

Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las ofertas de vida, y

Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas.

Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I

Definición y ámbito de aplicación

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

- a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
- b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
- c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

CAPÍTULO II

Derechos protegidos

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

- a) el derecho a que se respete su vida;
- b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
- c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
- d) el derecho a no ser sometida a torturas;
- e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
- f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y

- g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
- h) el derecho a libertad de asociación;
- i) el derecho a libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
- j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

- a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
- b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

CAPÍTULO III

Deberes de los Estados

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

- f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
- h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

- a) fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
- b) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;
- c) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
- d) suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
- e) fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
- f) ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;

buyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

- h) garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
- i) promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

Artículo 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

CAPÍTULO IV

Mecanismos interamericanos de protección

Artículo 10

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.

Artículo 11

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.

Artículo 12

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Artículo 14

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 15

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.

Artículo 16

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:

- no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
- no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 19

Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 20

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales podrán adoptar o rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Con-

vención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 21

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 22

El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 23

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.

Artículo 24

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que custodiará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman al presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

Hecha en la ciudad de Belém do Pará, Brasil el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 10 de octubre de 1995.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —Convención de Belém do Pará—, suscrita en Belém do Pará —República Federativa del Brasil— el 9 de junio de 1994.

Por la presente convención, cuya aprobación se solicita, los Estados parte manifiestan su intención de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos.

A los efectos de la presente convención, se considera "violencia contra la mujer", cualquier acción que cause la muerte, daño o sufrimiento físico o psíquico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La convención enumera los derechos protegidos por la misma, como el derecho a la vida, al respeto de su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad, a la libertad religiosa, al ejercicio de los derechos civiles y políticos, etcétera.

Los Estados parte se comprometen a adoptar los medios conducentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Cualquier persona o entidad no gubernamental legalmente reconocida en por lo menos uno de los Estados parte de la presente convención, podrá presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, peticiones que contengan denuncias o quejas contra el Estado por cualquier forma de violencia contra la mujer.

La aprobación de la presente convención, significará un paso adelante en la consolidación de los derechos inalienables de la persona humana, en el ámbito americano.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 570

CARLOS S. MENEM.

*Guido Di Tella — Eduardo Bauzá. —
Carlos V. Corach.*

ANTECEDENTES

I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1° — Apruébase la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —Convención de Belém do Pará—, suscrita en Belém do Pará —República Federativa del Brasil—, el 9 de junio de 1994, que consta de veinticinco (25) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

*Guido Di Tella — Eduardo Bauzá. —
Carlos V. Corach.*

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

APROBACION DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Artículo 1° — Apruébase la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", suscrita por nuestro país el 9 de junio de 1994, durante la XXIV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuyo texto en idioma español forma parte de la presente ley.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Hipólito Solari Yrigoyen.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto de ley que elevo a consideración del Honorable Senado tiene por objeto lograr la aprobación legislativa de un instrumento internacional que contribuirá al fortalecimiento de la protección internacional de los derechos humanos dentro del sistema interamericano.

Me refiero a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Organización de Estados Americanos durante la XXIV Asamblea General celebrada el 9 de junio de 1994 en la ciudad de Belém do Pará, Brasil.

Las principales disposiciones de la Convención de Belém do Pará se refieren al derecho de toda mujer a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado y al reconocimiento, goce y ejercicio de todos los derechos y libertades. Entre ellos se enumeran la igualdad de oportunidades para la participación política y el acceso a cargos públicos.

Una vez que los treinta y cuatro Estados miembros de la OEA ratifiquen el tratado quedan comprometidos no sólo a no discriminar a las mujeres sino a prevenir, investigar y sancionar dichas prácticas. También se obligan a abolir toda legislación que respalde la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

El reconocimiento y el respeto irrestricto de todos los derechos de la mujer resultan condiciones indispensables para su desarrollo individual y presupuestos necesarios para la construcción de sociedades más justas, solidarias y pacíficas.

Aún hoy, debemos reconocer que lamentablemente muchas mujeres de América, sin distinción de raza, clase, religión viven una situación generalizada de violencia.

En consecuencia, nuestra responsabilidad como parlamentarios debe encaminarse a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Sin duda, con la aprobación de este instrumento internacional se estará dando un paso significativo para alcanzar tal objetivo.

La reafirmación legal de la "Convención de Belém do Pará", es armónica, a su vez, con la voluntad manifestada

por el Congreso de la Nación al sancionar la ley 24.012 que contribuyó a asegurar un espacio de participación política a la mujer argentina.

Hipólito Solari Yrigoyen.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja, bloque justicialista.

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: me voy a referir muy brevemente al tema que da motivo al orden del día 1.064. Se trata del ejercicio de la facultad constitucional del Senado de la Nación para considerar una convención internacional suscripta por el Poder Ejecutivo a tenor del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, más concretamente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994.

Generalmente no fundamentamos los convenios que aprobamos por ley sino que sólo procedemos a darle directamente el trámite de aprobación. Pero este caso se refiere a una convención directamente referida a derechos humanos. Al respecto, nuestro país ha adoptado una posición de vanguardia en la materia, como quedó demostrado al darle jerarquía constitucional a los ocho convenios más importantes sobre derechos humanos que se suscribieron en el mundo, con su incorporación al texto de la Carta Magna reformada en 1994, en su artículo 75, inciso 22, como complemento de la primera parte del texto constitucional. Esto marca una política en materia de derechos humanos que por supuesto debemos enfatizar tratándole de dar el lugar que corresponde porque hace a nuestra sensibilidad y a nuestra posición nacional e internacional sobre el tema.

El convenio en consideración consta de veinticinco artículos y está dividido en cinco capítulos: tiene algunas definiciones en el capítulo I; una caracterización de los derechos protegidos en el capítulo II; los deberes de los Estados en el capítulo III; los mecanismos interamericanos de protección en el capítulo IV y las disposiciones generales en el capítulo V.

Debemos decir en primer término que esta Convención se encuadra en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sancionada por las Naciones Unidas.

Como definición consagra que la violencia contra la mujer, como principio general, constituye una violación de los derechos humanos, constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer.

Debemos decir que el ámbito institucional de aplicación de esta Convención es la Organización de Estados Americanos. Es decir, éste es un convenio que tiene su ámbito de aplicación en lo que nosotros conocemos como OEA.

En el capítulo I se define qué se entiende por violencia contra la mujer, caracterizándose como tal cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

En cuanto al ámbito donde se puede desarrollar esta acción, es amplio. Se refiere tanto al ámbito familiar o unidad doméstica o a cualquier otra relación interpersonal; a la comunidad, cualquiera sea la persona que lo perpetre, y que comprende, entre otros —aquí está caracterizando o tipificando cuáles son esos hechos— la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

En cuanto a los derechos protegidos, consagra expresamente esta Convención que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado; tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

Se reconoce además que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y se incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.

La Convención establece deberes para los Estados que condenan toda forma de violencia y se comprometen a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, obligándose a tal efecto una serie de acciones que están perfectamente establecidas en la Convención.

Por otra parte, se establecen mecanismos internacionales o interamericanos de protección, como la obligación de incluir en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres todas las medidas que se adopten para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer; pueden pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre interpretación de esta Convención y también habilita a que cualquier persona u organización no gubernamental pueda presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formulando denuncias o quejas por la violación de la Convención.

En síntesis, constituye un avance más en la protección de los derechos humanos, que hace en este caso a la dignidad de la mujer, que viene a complementarse con otra convención que fue aprobada por nuestro país a través de la ley 23.179, que es la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, suscrita por la República Argentina el 17 de julio de 1980. Esta Convención es uno de los ocho tratados y concordatos que han sido incorporados al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, por lo que tiene jerarquía constitucional.

Por estas razones, señor presidente y señores senadores, y considerando que la ratificación de esta Convención constituye un paso más en la protección de los derechos humanos, solicito la aprobación por parte de este cuerpo de esta convención internacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital, Frepaso.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: podríamos determinar que existen dos tipos de violencia hacia la mujer, basada en su condición y género: uno que podemos llamar privado, de individuo a individuo e, incluso, en el seno de la familia, y otro que está relacionado con lo público.

En cuanto al primer caso podemos decir que en la Argentina, desde 1980 y a raíz de un triste episodio en el que murió una mujer — Alicia Muñoz — apareció una conciencia de la denuncia de la violencia y, sobre todo, de la familiar. Por cierto sería ingenuo pensar que este hecho determina el comienzo de la violencia en la familia.

Este tipo de violencia no reconce sectores sociales. Hay tendencia a decir a veces que se produce por motivos económicos, pero no es así.

Tiene que ver con situaciones culturales. Quien más — quien menos habrá visto mujeres golpeadas de cualquier sector social y edad que en general ocultan que lo son.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sra. Fernández Meijide. — En este caso, podrán decir y con razón que está el Código Penal. Se ha avanzado en la legislación argentina, con dificultades, pero con mucha participación de las mujeres a través de organismos no gubernamentales para castigar a quien ejerce violencia contra la mujer por su carácter de tal.

¿Por qué, entonces, estamos pidiendo y avanzando en que sea el Estado argentino quien reconozca las convenciones internacionales? Es gratuito y de perogrullo decir acá que las convenciones internacionales obligan a los Estados. Pero insisto en esto porque, como bien dice la propia Convención de Belém do Pará — que de ello se trata —, los Estados pueden tomar medidas preventivas y sancionadoras.

En general, no creo que la mayor sanción sea la que frene este tipo de situaciones. No es la penalización en aumento lo que determina el retroceso de las situaciones de violencia. Más bien soy una convencida de las medidas preventivas y, en este caso, de lo que tiene que ver con un cambio de cultura. Es decir: mejor preguntarnos qué nos pasa en lugar de cuánto mayor es la pena que podemos aplicar.

Los principios de la Revolución Francesa respecto de la igualdad “permearon” con dificultad a las sociedades occidentales con relación a la mujer que, sin embargo, fue ascendiendo en distintos lugares y ocupando el que le corresponde legítimamente, pero todavía falta mucho por recorrer en el tema de la igualdad de oportunidades.

Lo cierto es que aún fue más difícil de “permear” la estructura piramidal de la familia patriarcal. Porque donde se discuten temas de poder o existe la sensación de que se pone en peligro este tipo de temas, habitualmente aparece la violencia.

Por eso es que insistimos en que se apruebe esta nueva convención, a sabiendas — como todos sabemos — de que ni las mejores leyes ni los mejores convenciones por sí mismas erradicar los problemas que se quieren subsanar.

Repito: es una cuestión cultural a la cual debe contribuirse desde todos los lugares donde se acepta una democracia y, como parte de la de-

mocracia, la no discriminación y la no inferiorización.

Digo esto porque para que la violencia exista antes tuvo que haber existido una fuerte inferiorización. Es decir, la convicción llevada hacia la persona que va a ser discriminada de que es inferior; de que no tiene la calidad intelectual que le corresponde o los conocimientos suficientes. Esto último a veces es cierto porque esta falta de igualdad de oportunidades ha hecho que muchas mujeres, en este país y en otros, no hayan alcanzado las formas de conocimiento a las que tienen acceso los varones.

También es indispensable que el sector sea discriminado y, además, que devenga frágil; esto es, que se considere a sí mismo impotente para defender sus derechos. Derechos que, por un lado, puede desconocer, pero que aun cuando así no fuera se sienta impotente para defenderlos.

Esto ocurre con muchos grupos sociales. Básicamente así ha sucedido con sectores muy amplios de esta sociedad y posiblemente continúe a menos de que haya cambios sociales fuertes.

No sirve que algunas mujeres que, por supuesto, hemos podido ir atravesando estas dificultades digamos "porque yo llegué, cualquier mujer puede llegar". Este es un pensamiento —si me permiten— altamente "machista", aunque sea manifestado por una mujer.

Yo creo en el cambio cultural como el resultado de un proceso colectivo que, obviamente, implica la defensa de los débiles, el reconocimiento de sus derechos y su ubicación equitativa con respecto a los demás.

También es verdad que en este mundo el tema de los derechos humanos pertenece a la modernidad. Es muy reciente, reconocido no hace tanto tiempo. Las convenciones sobre cuestiones tales como la situación de las mujeres y de los niños también son de reciente data.

Indudablemente, cuando una sociedad retrocede en el goce de los derechos —sean políticos, económicos y, por lo tanto, sociales o culturales—, los primeros sectores abandonados son aquellos que entraron más tarde en el espacio de los derechos. Para decirlo concretamente: en las sociedades con penurias económicas los primeros que son desconsiderados en cuanto a sus derechos son las mujeres y los niños.

Entonces, para evitar las violencias de todo tipo —que ya han sido descriptas por el señor senador preopinante y que no voy a repetir a efectos de no redundar— creemos que el gobierno, el Estado, está obligado a aplicar polí-

ticas de asistencia en los casos en que las mujeres vean violentados sus cuerpos, sus psiques, sus posibilidades de trabajo, de estudio y de comunicación.

También está obligado respecto de la prevención en relación con cualquiera de estas políticas al fuerte impulso de capacitación para igualar los géneros, obviamente, a crear, aplicar y modernizar las leyes, y a articular —y favorecer la articulación— las redes de los organismos no gubernamentales, que han resultado muy eficaces en la difusión y defensa de los derechos de las mujeres.

Esta convención de Belém do Pará, que se llama Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la OEA —como se dijo acá— el 9 de junio de 1994, debe también, a nuestro criterio —y apoyando la moción formulada por el señor senador Eduardo Menem—, ser aprobada por este cuerpo.

Invito a tal efecto a los señores senadores para que este país pueda decir algún día que la mitad de su población —que son las mujeres— goza de plenos derechos, que tienen que ver con aquellas leyes que han modificado incluso costumbres en la política, como es la ley de cupos, la cual por cierto —y permítanme la humorada— ni se nota en este recinto. En realidad, no sé si es una humorada o un gran "lamento borincano".

Señores senadores: les pido respetuosamente, en nombre del Frepaso, que votemos afirmativamente esta iniciativa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: es para formular una simple aclaración.

Como integro la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y además soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no hay dictamen que quisiera firmar con más entusiasmo que éste, motivo por el cual pido se incorpore mi firma.

Sr. Presidente (Menem). — Se tiene en cuenta lo manifestado por el señor senador y se incorporará su firma al dictamen.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, bloque radical.

Sr. León. — Señor presidente: el bloque del radicalismo apoyará la iniciativa con el entusiasmo que merece este tratado porque entre nuestras tradiciones está la de prestigiar la personalidad del género humano.

El que nos ocupa es un tratado discutido y aprobado en Brasil, y los Estados que lo suscriben manifiestan su intención de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

El tratado se refiere al ámbito de la OEA, que es el ámbito de América. Diría yo que quienes votaremos esta iniciativa tenemos el deseo de que este tipo de legislación y de compromisos, dentro del país y fuera de él, adopte un criterio de universalidad, que es el que reclama — pienso yo — esa formidable dignidad que expresan las mujeres.

—Se llama para formar quórum.

Sr. León. — Recién le decía a un colega que los derechos humanos en relación con la mujer son los mejores derechos humanos, porque ella tiene esa majestad formidable de la maternidad.

El radicalismo sostiene que todo lo que sea violencia — en este caso, contra la mujer —, cualquier acción que cause la muerte, daño o sufrimiento — esto es lo que dice el texto que estamos por aprobar —, cualquier acción contra lo físico o lo psíquico en el ámbito público o privado, contradice la sustancia de la aprobación que estamos por realizar.

Me voy a alejar un poco del texto porque sobre él ya se han expalado muy bien el señor miembro informante y la señora senadora por la Capital Federal.

El mundo tiene muchos tratados, entre ellos uno formidable como es la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros votamos la ley y le damos estructura jurídica, pero tengo la sensación de que los gobiernos o los sectores a los que circunstancialmente les toca dirigir los destinos de los pueblos todavía no hemos creado las bases necesarias que nos permitan hacer realidad el objetivo que persigue esta norma.

Se acaba de realizar una formidable reunión de mujeres en Pekín, donde se juntaron alrededor de cuarenta mil miembros para defender sus derechos. Llegaron de todo el mundo y la Argentina también tuvo su representación en esa reunión. Tal vez, parodiando lo que sucedió allí, podríamos decir que no hay una fórmula única acerca de cómo deben llevar su vida las mujeres. Ello debe nacer de su elección. Cada mujer tiene derecho a desplegar su propio potencial, y debemos reconocer que nunca las mujeres alcanzaran su máxima dignidad hasta tanto sus derechos humanos sean totalmente protegidos. Para lograr ello los gobiernos deben asumir su responsabilidad. Este es, básicamente,

el reclamo hecho en esa reunión de Pekín.

No voy a extenderme más porque hay firme conciencia en todos los sectores políticos que integran este Senado acerca de este aspecto, razón por la cual no se justifican largas exposiciones. Pero sí debo decir que otras organizaciones, entre ellas la OIT, han tratado siempre de custodiar la igualdad de la mujer con el hombre. Nosotros establecimos en la Constitución que sean iguales los salarios de los hombres y de las mujeres. No obstante, hay algunas zonas de nuestro país en las que esto no se respeta. Hay que tomar esta iniciativa como un avance, como la creación de una conciencia, como la siembra de la planta de nuestros compromisos y responsabilidades, para que la mujer pueda formar su familia, cuidar a sus hijos, custodiar sus amores y, tal vez, irse acercando a la dignidad que su jerarquía merece en el escenario de la sociedad de nuestro tiempo.

Podría hablar de lo que dice la convención, pero nosotros debemos tratar de que lo que allí se expresa se haga realidad en el marco de nuestras responsabilidades. Esto que estamos buscando tiene criterio de universalidad. Pero en América nos duele mucho el presente porque en el marco de la niñez también hay una convención sobre sus derechos, no obstante lo cual observamos por televisión a niños hambrientos y pauperizados. Incluso, vemos que en algunas zonas de América avanza mucho el analfabetismo y la pobreza. Entonces, que sirva esto de convencimiento para que veamos en cada mujer la significación de una causa muy grande, de tipo universal, como es la de prestigiarla.

En nuestro país avanza la prostitución porque crece la pobreza. Por lo tanto, junto con esta iniciativa, debemos buscar una mejor distribución de los ingresos y crear las condiciones para que tengamos una sociedad mucho más justa, genuinamente libre, sin miedos, con trabajo y con posibilidades de producir.

En consecuencia, en nombre del radicalismo, me adhiero totalmente al espíritu de este tratado, pero dejo sentado que mi partido piensa que si no hay una concepción social de la democracia que se enoche frente al hambre — que se torture frente a otras torturas y que pueda apreciar cómo la droga achica la dignidad de la mujer, este convenio quedará flotando en nuestra sociedad como una aspiración, ya que no tendrá importancia.

Nosotros queremos la dignidad de la mujer que, por ejemplo, está simbolizada en nuestro senado por las mujeres que están sentadas aquí

en representación de los pueblos, que buscan realmente su participación a través de su propia militancia, que es definitivamente la búsqueda de un camino.

El hombre llegó a la Luna y tiene genio, pero la violación avanza. Entonces, como recién decía la señora senadora, si no modificamos pautas culturales, si cada media hora nuestra televisión de hoy muestra una violación, un crimen, un apasionamiento o un deterioro de la dignidad de la mujer, vamos a seguir votando leyes, pero no conseguiremos el objetivo de hacer de cada mujer una especie de personaje sagrado, porque ella es madre, novia, cuida hijos y, al fin y al cabo, representa un patrimonio trascendente para cualquier sociedad.

Con estas palabras dejo sentadas las ideas que queremos los radicales y señalo que un proyecto similar al que hoy envía para su aprobación al Poder Ejecutivo fue presentado en su oportunidad por el ex senador Solari Yrigoyen, miembro de nuestra bancada.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Formosa del Partido Justicialista.

Sra. Peña de López. — Señor presidente: simplemente para adherirme a las expresiones de todos los colegas que hablaron sobre este tema y, especialmente, a las de la señora senadora Fernández Meijide.

Así mismo, invito también a los legisladores que todavía no bajaron al recinto, a los compañeros senadores, a que así lo hagan, a efectos de que este proyecto sea aprobado por la mayoría más amplia posible, recordándoles que, así como las mujeres los acompañamos en todo ellos también deben acompañarnos en esta iniciativa.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado por unanimidad el proyecto de ley. Se comunicara a la Honorable Cámara de Diputados. (Aplausos.)

9

INCENDIOS FORESTALES EN EL SUR

Sr. Presidente (Menem). — Proseguimos con las preferencias votadas con anterioridad.

Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano que

propone un proyecto de comunicación, que unifica las iniciativas de varios señores senadores, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo nacional acerca de los incendios forestales en el sur argentino.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Ecología y Desarrollo Humano ha considerado los proyectos de comunicación y resolución de los señores senadores: Baum (S.-1.859/95); Rivas (S.-1.862/95); Sáez (S.-1.871/95); Costanzo, Cañero (S.-1.872/95); León (S.-1.885/95) y Solana (S.-1.889/95) relacionados con los incendios forestales ocurridos en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro y otras cuestiones conexas; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente:

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que corresponden, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con los incendios forestales ocurridos en la región Andino-Patagónica y que afectaron principalmente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut:

1º —Cuál es la dimensión del daño ecológico ocasionado por los incendios de bosques, matorrales y pastizales ocurridos desde mediados de diciembre de 1995 a fines de enero del corriente año, en las provincias citadas y los consecuentes perjuicios económicos, culturales y sociales sobre las poblaciones afectadas y en especial:

a) El valor y el porcentaje afectado por tipo de vegetación.

b) La importancia y el estado de conservación de las áreas incendiadas y el tiempo estimado de recuperación de las mismas.

c) Las pérdidas en cantidad y calidad de la diversidad biogenética de la región.

2º — Si tiene conocimiento sobre las causas o el origen de los incendios forestales.

3º — Cuáles fueron las medidas adoptadas para circunscribir y controlar los incendios desatados o en su caso minimizar sus efectos.

4º — Qué medidas dispuso ante el informe elaborado por la Auditoría General de la Nación en el mes de julio del año 1995, el cual advirtió sobre el desmantelamiento del equipo que posee la Nación para combatir incendios forestales y la falta de coordinación existente entre los organismos encargados de la prevención de incendios forestales en la Patagonia y en tal caso cuáles son las razones por las cuales no se implementaron las recomendaciones sugeridas.

5º — Cuáles son los medios que posee la Administración de Parques Nacionales y que presupuesto se destina